Se agradece la invitación de la Junta de Coordinación Política de esta cámara de Senadores.

Senador presidente de la Comisión de Energía.

Señoras y señores legisladores.

La industria petrolera puede volver a ser, como por largo tiempo lo fue, una palanca que impulse, de nueva cuenta, la industrialización en México. Ese es el sustrato de los preceptos constitucionales que la amparan. Así piensa la mayoría de los mexicanos a juzgar por la activa movilización que se ha generado en el país en defensa de su patrimonio petrolero y que alienta el gobierno legítimo. Así lo reflejan las variadas encuestas que, sobre el particular, se han levantado a nivel nacional. Y así lo expresarán, de propia voz, los ciudadanos que por millones habrán de concurrir a la consulta popular en curso.

Alrededor de esta industria, ya sea como proveedores o clientes, se formaron numerosas cadenas productivas de variada índole y peso. Pemex fue, y puede volver a ser, el pivote que impulsor de un desarrollo auto sostenido y justo. Para ello habrá que remontar varios obstáculos. De estos, uno en especial llama la atención: la inexplicable compulsión de un crecido número de tomadores de decisión por radicar las soluciones de nuestros problemas y colocar las riquezas propias, en manos de agentes externos.

Los grilletes que hoy sujetan a Pemex, impidiéndole cumplir con su misión se agrupan en un conjunto de prácticas dañinas: el apoyo a las raquíticas finanzas de la hacienda pública es la principal. Pero en íntima conexión con ella, y que deforma su vocación, es la exigencia de exportar masivos volúmenes de crudo. Estos grilletes no vienen solos. Los condiciona un modelo depredador,

derivado del consenso de Washington, que ya hace agua por todos lados, no sólo en México, sino a escala mundial. Sus efectos perniciosos se destapan por doquier ante la imposibilidad de seguir ocultando sus malignas aristas. Más le valdría al grupo en el poder voltear, con humildad y realismo, a ver el fruto de un gran naufragio, caro a las esperanzas de millones de mexicanos.

Pasemos revista a sólo algunos de sus fracasos, cruentos en extremo. Empecemos por el frente agrícola-alimentario, sector abandonado a su mala suerte para dejarlo caer en las redes de conocidas trasnacionales, sustitutas del retiro apresurado y torpe de las protecciones y los apoyos gubernamentales. Hoy, la negativa balanza comercial del sector alcanza los 4.2 mmd. La construcción de infraestructura, que se internacionaliza a pasos acelerados y subyuga a los constructores locales. 9 de los 17 proyectos concesionados los obtuvieron empresas del exterior, 7 de ellas españolas. La postración de tecnología y ciencia en los recintos universitarios y al interior de las empresas ancla. Caso especial ocupa el decaimiento de las empresas de ingeniería, afectadas por el contratismo que, sin contemplaciones, favorece a la de los extranjeros.

En 1988 Pemex compraba a proveedores nacionales 2 terceras partes de sus bienes. Hoy, la abastecen en sólo una tercera parte de sus requerimientos. Y qué más decir en cuanto a la propia historia reciente de la petroquímica y refinación de Pemex, con sus múltiples cadáveres esparcidos por los que fueran florecientes campos productivos. Todas estas ramas de la actividad del país, cruciales para su desenvolvimiento, hablan de un cementerio ante el cual habrá que hacer mucho más que entonar llantos y responsos. Exigen plantear profundas reformas.

Reformas que no son, ni de cerca, las que el señor Calderón ha propuesto para Pemex. Pues estas, por el contrario, apuntan hacia idénticos rumbos por los que han transitado las pasadas experiencias negativas descritas. Aprobarlas, sería volver sobre lo que ya se ha padecido. Las reformas a debate, intentan abrir, de par en par, las puertas de sustantivos mercados, ofrecen parte, y de ser posible toda, la industria petrolera. Inclusive empresas conexas podrían caer bajo el control de los voraces intereses externos o quedar en poder del

gran capital monopolista del interior para desquiciar, todavía más, el ya injusto reparto de riqueza y las oportunidades.

Habría que traer a este debate las urgencias de la elite para amoldarse a la globalidad. La apertura económica fue intempestiva y por demás violenta sobre la entera Fábrica Nacional. Una a una las distintas ramas productivas comenzaron a ser desmanteladas y rotas sus interconexiones. La llegada del TLC con su retórica que apuntaba hacia la inserción de México en los flujos internacionales del comercio, haciéndolo una potencia exportadora, ha dado como resultado, irónicamente, una enorme maquinaria de importaciones.

Sin contar la maquila, se han importado, del 2003 al 2006 solamente, 555.3 mil millones de dólares contra 443.2 mil millones de dólares de exportaciones, incluyendo en este rubro, claro está, los gigantescos volúmenes de crudo con precios ya en rápido aumento en esos años. Un déficit acumulado de 112.1 mil millones. Y la tendencia apunta hacia un agravamiento progresivo.

El modelo actual, señores legisladores, se muestra incapaz de solventar los requerimientos integradores. A pesar de ello, se insiste en apresurar el proceso para traer de fuera hasta lo más superfluo. El efecto sobre ramas industriales completas está siendo devastador. Del año 2003 al 2006, las estadísticas del déficit en la balanza comercial, sin contar con la maquila, simplemente son aterradoras. 24 mil millones de dólares en 2003, 28 en el 2004, 30 en el 2005, 30 mdd en el 2006. Y, con seguridad, dados los precios internacionales de petrolíferos, petroquímicos y alimentos, esta situación, ya preocupante, aumentará en años sucesivos. ¿No son suficientes estos números para cavilar y para actuar en la substitución del modelo vigente? Detrás de cada empresa extranjera hay una conciencia nacional refinada por el afán de dominio. En compañía de las trasnacionales viajan numerosas empresas de soporte que remitirán sus compras, servicios y utilidades a las matrices. A la petrolera noruega StatoilHidro, la acompañan, en sus aventuras externas, unas 140 empresas de variado tipo y tamaño que se han formado a su derredor y, cada una de ellas, busca un sitio para lucrar.

El arrendamiento, la maquila, la contratación discrecional, la privatización, sobre todo la externa, interrumpe, casi de tajo, todo encadenamiento y exporta los empleos mejor pagados. En ustedes recae la responsabilidad de legislar para beneficio de México. Se espera un momento de altura y patriotismo.

Nuestra fuerza no se extrae, como afirman algunos, en el rencor o la frustración, sino se extrae de la lucha por mantener viva la esperanza de millones de jóvenes estudiantes, trabajadores y desempleados, las mayorías de este angustiado país de los mexicanos. Nuestro esfuerzo se anima en la defensa de su patrimonio, el futuro y las aspiraciones de progreso. Y nos preocupa la inserción de la empresa nacional en el relanzamiento de la industrialización del país.

Sr Presidente, con esa visión, se ha preparado un comunicado que leeré a nombre de del grupo para la defensa del petróleo formado por escritores, intelectuales, poetas, pintores, analistas y académicos que han estado presentes en este y otros muchos debates trascendentes para la salud de la Nación. Los hemos titulado las trece líneas rojas. Dice así.

LAS TRECE LÍNEAS ROJAS DE LA REFORMA PETROLERA

Los debates alrededor de la llamada propuesta de reforma energética ya han puesto en claro que el conjunto de seis iniciativas debería ser rechazado. Es inaceptable, primero, por su carácter contrario a la letra y el espíritu de la Constitución, a la que se pretende modificar a través de la reforma de leyes secundarias. Es también inaceptable por su evidente intención privatizadora. Ésta se manifiesta en el objetivo implícito de transferir a empresarios e inversionistas privados, tanto foráneos como nacionales, las actividades centrales de la industria. Se les permitiría construir, operar y ser propietarios de instalaciones, equipos y ductos para explorar y desarrollar campos de petróleo y gas; para refinar petróleo y procesar gas, y para transportar, almacenar y distribuir productos petrolíferos y petroquímicos básicos. En una palabra, se pondría en manos privadas el núcleo de la industria petrolera, constituido por las funciones básicas de PEMEX.

Específicamente, destacan en las iniciativas propuestas trece disposiciones que resultan en especial lesivas al desarrollo nacional y en las que se materializa el despojo que se pretende perpetrar. Se trata de las siguientes trece *líneas rojas*:

Primera: autorizar la asignación por invitación restringida o adjudicación directa de contratos de obras y de prestación de servicios para realizar actividades sustantivas, incluyendo exploración y desarrollo, refinación y petroquímica básica. Los contratos de mayor importancia – como los relativos al desarrollo de innovaciones tecnológicas y a servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación – podrán no someterse a licitación. Además, tanto el alcance de estos contratos como las remuneraciones correspondientes podrán ser fijos o variables, determinadas o determinables, e incluir “incentivos tendientes a maximizar la eficacia o éxito de la obra o servicio”. Es evidente una laxitud excesiva que abre espacios a la corrupción. (Arts 45 y 46 del proyecto de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos – en adelante Ley Orgánica.)

Segunda: transferir a particulares porciones no determinadas de la renta petrolera derivada de las operaciones de producción de petróleo y gas que se contraten con ellos. Establecer que, en todos los casos, las remuneraciones serán en efectivo y no concederán propiedad sobre los hidrocarburos no es condición suficiente para evitar la transferencia de renta ni para asegurar que PEMEX conservará el control sobre las actividades de exploración y desarrollo. El pago en efectivo por la exploración y extracción equivaldrá al precio de mercado del crudo extraído y disminuirá el monto de

la renta petrolera que PEMEX-PEP realice en el momento de comercializarlo. (Art 6° del proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo – en adelante Ley Reglamentaria – y Art 46 de la Ley Orgánica.)

***Tercera:** acentuar la artificial especialización de PEMEX en la extracción de petróleo y gas, entregando al sector privado la elaboración de productos industriales de alto valor agregado.* En las iniciativas no se distingue entre cubrir un costo temporal de mercado por servicios recibidos – en tanto se desarrollan las capacidades propias – y hacer partícipes de las utilidades a socios permanentes. Esto se plantea en el caso de la refinación en que, dados los actuales diferenciales de precios entre el crudo pesado, el ligero y las gasolinas, una planta de 400 MBD, a los precios internacionales vigentes, asegura márgenes no inferiores a dos o tres mil millones de dólares anuales, con lo que la inversión realizada podría recuperarse con alta probabilidad al tercer año de haber iniciado operaciones. (Véase, entre otros, el Art 4° de la Ley Reglamentaria.) (DIM)

***Cuarta:** autorizar, a trasmano y sin reconocer su verdadero carácter, la celebración de contratos de riesgo, contrariando el espíritu de la Constitución y el texto vigente de la Ley Reglamentaria.* La suma de las características que se atribuyen a los contratos para la realización de obras y la prestación de servicios relacionados con la exploración y desarrollo – incluyendo la concesión de incentivos por desempeño (se pagará más que proporcionalmente por barril extraído mientras más se extraiga), la flexibilidad en cuanto al objeto y la remuneración de las obras y servicios y la equivalencia entre el pago en efectivo y el valor del petróleo producido – los hacen de hecho indistinguibles de los contratos de riesgo. A diferencia de lo que ocurre con los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución, las iniciativas no especifican las obligaciones de los contratistas o permisionarios privados de exploración, desarrollo y refinación. (Diversos artículos de la Ley Reglamentaria, en especial omisión incurrida en el Art 15, y de la Ley Orgánica.)

***Quinta:** posibilitar el desplazamiento de PEMEX y su sustitución por empresas privadas en actividades sustantivas de la industria petrolera.* El tipo de contratos de obras y prestación de servicios previstos en las iniciativas pueden, potencialmente, dar lugar a la exclusión del organismo de nuevos espacios y localizaciones de la industria petrolera. Es concebible, por ejemplo, que una sola empresa o un consorcio de ellas celebren un contrato de exploración y desarrollo, conectado con un segundo contrato para servicios de refinación y un tercero de transporte – incluyendo el tendido y operación de ductos – y almacenamiento para distribución, estableciendo una cadena de

actividades integradas por completo al margen del organismo. (Interpretación del alcance de diversos artículos de la Ley Reglamentaria y de la Ley Orgánica.)

Sexta: prever sanciones más rigurosas para PEMEX y sus subsidiarias que para los permisionarios privados. El régimen en materia de obligaciones, sanciones y medidas de seguridad plantea, en general, más exigencias a los organismos públicos que a los permisionarios privados. (Art 15ª de la Ley Reglamentaria.)

Séptima: abandonar el carácter de empresa petrolera integrada y flexibilizar la estructura institucional de PEMEX, en cuanto al número, objeto y permanencia de sus organismos subsidiarios. Se abandona el concepto del organismo como empresa petrolera integrada y se abre la puerta para que sus organismos subsidiarios sean establecidos, fusionados o incluso extinguidos por iniciativa presidencial, aprobada por el Consejo de Administración. Sería preferible que la Ley estableciera el carácter de PEMEX como organismo integrado e indicase que el eventual establecimiento, fusión o extinción de sus subsidiarias sólo podría efectuarse por Ley, de suerte que correspondiera al Congreso la responsabilidad de establecer la estructura institucional del organismo. (Art 4º y fracc VIII del Art 18 de la Ley Orgánica.)

Octava: establecer la “creación de valor económico” como objetivo central. Debe reestablecerse la garantía de la seguridad energética de la nación, mediante el abasto oportuno y eficiente de la demanda nacional como objetivo primordial del organismo. De otro modo, se mantendrá y aún acentuará el sesgo exportador. (Último párrafo del Art 7º de la Ley Orgánica.)

Novena: proponer un Consejo de Administración de PEMEX cuya integración, facultades, carácter discriminatorio, grado de discrecionalidad, falta de transparencia, insuficiencia de responsabilidad e indefinición de atribuciones lo torna funcional sólo para los propósitos privatizadores, pero no para una gestión eficiente del organismo. (Sección II de la Ley Orgánica.)

Adviértanse, en especial, las siguientes características del CA propuesto:

- *Integración.* Se propone elevar de once a quince el número de integrantes del CA, añadiendo a cuatro “consejeros profesionales”, dos de los cuales serían de tiempo completo y representantes del Estado y dos de tiempo parcial, sin aclarar a quién representarían. Se establecen así consejeros de dos categorías, lo que es discriminatorio. No se señala cómo se garantizará la ausencia de conflicto de interés de los consejeros profesionales de tiempo parcial, respecto de sus demás actividades. (Frac III del Art 8º y Art 15 de la Ley Orgánica)

- *Designación.* Al elevarse de once a quince el número de integrantes del CA, se eleva también la proporción de los nombrados directamente por el presidente de la República, que pasa de 55 a 66 por ciento del total. Esta designación los convierte, de hecho, en representantes del gobierno. Si se deseara que fueran de veras profesionales e independientes se prevería, por ejemplo, que fueran designados por el Congreso a propuesta de colegios profesionales o entidades académicas. La designación por ocho años, como ha hecho notar el INAP, rebasa “la temporalidad de las facultades del ejecutivo”. (Fracc I y III del Art 4º y Art 14 de la Ley Orgánica.)
- *Transparencia.* Se relega al reglamento del CA la definición de las “normas para la difusión de los acuerdos y, en su caso, de los votos particulares” del CA. En beneficio de una verdadera transparencia, estas normas deberían establecerse en la Ley. (Art 15 de la Ley Orgánica.)

Décima: conceder protección extralegal a favor de los miembros del CA y del director general. Establecer seguros, fianzas o cauciones a favor de esos funcionarios para cubrir el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que puedan causar constituye un incentivo al descuido, la irresponsabilidad e incluso la corrupción. Es una propuesta por completo inadmisibles. También es inadmisibles que los consejeros profesionales de tiempo parcial no estén sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. (Art 37 y 30 de la Ley Orgánica.)

Undécima: emitir “bonos ciudadanos” como un primer paso hacia la bursatilización de una parte del capital de PEMEX. Más que títulos de deuda, ya que su rendimiento no es fijo, sino que está relacionado con los resultados del organismo, los bonos parecen acciones o títulos de inversión neutra, es decir sin derechos corporativos. Aunque se tiene previsto que no rebasen del 5% del total de la deuda registrada del organismo, es posible que se conviertan en un vehículo para el financiamiento privado de PEMEX. (Apartado B del capítulo IV de la Ley Orgánica.)

Duodécima: aceptar “la aplicación de derecho extranjero [y] la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles” es absolutamente improcedente e inaceptable. Sacrifica las mejores tradiciones jurídicas internacionales, sustento de la soberanía de la nación. (Párrafo segundo del Art 49 de la Ley Orgánica.)

Decimatercera: orientar la modificación de la Ley Federal de Derechos aplicables a PEMEX a estimular, con un trato fiscal benigno, la explotación de campos

difíciles (Chicontepepec y aguas profundas), cuya exploración y desarrollo muy probablemente sea contratada con empresas privadas, extranjeras o nacionales. Se incurre en el error político de separar el tratamiento impositivo general por otro más suave a esos yacimientos, donde aparentemente residen las mayores tentaciones privatizadoras o de formación de alianzas asociativas con empresas extranjeras. (DIM)

(JEN revisión1– 21jun08)